

EL MODELO NEODESARROLLISTA: ESCASEZ DE DOLARES Y ESTANCAMIENTO INDUSTRIAL.

GUILLERMO GIGLIANI

El análisis de la política económica de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner puede ser encarado en dos etapas, tomando en cuenta la evolución del PIB. La primera de ellas se extiende de 2003 a 2011 y exhibe un crecimiento a “tasas chinas”. En 2012, ese ritmo de expansión se modificó sustancialmente debido a la irrupción de graves dificultades en el sector externo, que ya habían empezado a manifestarse un tiempo atrás. De esta forma, se inauguró una nueva fase de bajo aumento del PBI, en 2012 y 2013 y esta tendencia se proyecta a 2014. Lejos de solucionarse, el problema de las divisas se vio cada vez más agravado.

El período de gran expansión económica tuvo lugar hasta 2011, con aumentos del producto, el empleo, las inversiones y una recomposición parcial del salario. Esta etapa no estuvo exenta de dificultades ya que en 2007 apareció una alta inflación que se tornaría persistente pero que, en aquellos años, no afectó la marcha de la producción. En cambio, la suba de los precios determinó que la pobreza abarcara un sector elevado de la población, superior al 20%, en medio de altas ganancias empresarias y de bonanza económica. La inflación también deterioró el tipo de cambio real, aunque este efecto se vio contrapesado por el extraordinario ascenso de los términos del intercambio, un fenómeno sin precedentes en todo el siglo XX, tanto por su vigor como por su notable duración. Asimismo, en 2007 y en 2008 se tuvo una gran fuga de capitales sin que el gobierno tomara medida alguna para contenerla. En los años siguientes, este drenaje de divisas continuó en ascenso.

En un contexto de agudización de éstas y otras dificultades, en 2011 afloraron serias contradicciones del modelo neodesarrollista. En primer lugar, se registró un déficit en la balanza de energía, de 2.785 millones u\$s frente a un superávit de 6.029 millones u\$s anotado en 2006. Este déficit energético es resultado directo de la política petrolera propiciada por Néstor y Cristina Kirchner, de aliento inicial a la privatización y de posterior transferencia de parte del paquete accionario al grupo local Ezkenazi. Otro fuerte traspié fue el rojo de la cuenta de servicios de turismo, provocado por un dólar cada vez más favorable para viajar al exterior. El desbalance fue de 1.139 millones u\$s en 2011 frente a un superávit de 294 millones u\$s en 2010 (cuadro 1). Finalmente, el déficit de divisas del sector industrial, que es el canal de mayor salida de dólares de la economía argentina, trepó a 31.511 millones u\$s, en 2011 .

Junto a estas dificultades generadas por la propia dinámica del modelo neodesarrollista, hay que agregar otro importante factor de desequilibrio externo, esto es, la política con relación a la deuda externa pública, consistente en la cancelación en efectivo de todos los títulos a medida que vencen y, asimismo, en el pago anticipado del pasivo con el FMI (9.600 millones u\$s en 2006).

El período de bajo crecimiento iniciado en 2012.

En su conjunto, las mencionadas dificultades abrieron, en 2012, un nuevo período de bajo crecimiento del PBI y de estancamiento de la producción industrial, trabados por la aparición de la restricción externa, esto es, por un faltante de los dólares necesarios para los diversos compromisos. La reacción de la presidente Cristina Kirchner se centró en dos medidas principales. Primero, prohibió la adquisición de divisas en el mercado de cambios, una operatoria que hasta entonces se había autorizado sin ningún tipo de reparo. De esta forma se procuró frenar la fuga de capitales que en cinco años (2007-2011) se había consumido la impresionante suma de 79.817 millones u\$s. La segunda disposición consistió en racionar las importaciones de insumos y, sobre todo, de equipos productivos para evitar que empeoraran los problemas en la balanza comercial.

Si bien la primera medida obturó la fuga de capitales privados, en conjunto no lograron arreglar el sector externo, que mostró un empeoramiento. El déficit de viajes y turismo tuvo, entre 2011 y 2013, un crecimiento exponencial de 1.139 a 10.500 millones u\$s, a pesar de los sucesivos recargos fijados por la AFIP, a cuenta del impuesto a las ganancias (cuadro 1). A su vez, el desbalance de energía rondó los 6.500 millones u\$s en 2013 y proyecta un faltante de 10.000 millones u\$s para 2014 (cuadro 3).

Cuadro 1

SALDO DE LA CUENTA DE TURISMO Y PASAJES
en millones de dólares

Año	Saldo	Ingresos	Egresos
2006	1.086	2.509	-1.423
2007	1.132	3.072	-1.940
2008	899	3.682	-2.782
2009	275	2.918	-2.643
2010	294	3.675	-3.381
2011	-1.139	3.617	-4.756
2012	-4.667	2.644	-7.311
2013 (*)	-10.500	1.500	-12.000

(*) estimado

Fuente: Overview 1129, noviembre 2013.

Por su parte, a pesar del estancamiento industrial, el déficit comercial MOI totalizó un valor récord cercano a los 34.200 millones u\$s (cuadro 5). Este desequilibrio de la balanza MOI no sólo cuestiona la tesis oficial de la “reindustrialización”, sino que también abre un inevitable interrogante sobre la capacidad o la decisión que tiene el gobierno para regular el flujo importador.

Cabe precisar que este deterioro de las cuentas externas se verifica bajo condiciones sumamente favorables del comercio exterior. Desde la salida de la convertibilidad, la balanza de mercancías

mostró elevados excedentes, gracias al aporte del sector agrícola y a pesar de los déficits anotados en la balanza MOI y de energía y combustible. El hecho de obtener saldos comerciales positivos tras un período prolongado de expansión del sector industrial es un fenómeno inédito en la Argentina. El factor decisivo que apuntala el saldo comercial es el precio de las materias primas agrícolas, en particular, de la soja.

En 2012 los términos del intercambio fueron un 49% superior a los vigentes en 1993 (cuadro 2). El INDEC calcula una serie estadística del llamado efecto de términos del intercambio, que mide las ganancias que obtiene nuestro país en su intercambio comercial en un año dado (por caso, 2012) si prevalecieran los precios de las exportaciones e importaciones de un año base (1993). Así, las exportaciones de 2012 valuadas a precios de 1993 arrojan 44.509 millones u\$s y ese valor ajustado por los términos del intercambio asciende a 66.186 millones u\$s. Esto significa un beneficio de 21.677 millones u\$s en 2012 originado sólo en la mejora de los precios internacionales.

Cuadro 2

PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES Y EFECTO DE TERMINOS DEL INTERCAMBIO
en millones de dólares y en índice 1993=100

	Exportaciones	Términos del intercambio	Poder de compra exportaciones	Efecto términos del intercambio
	a precios 1993	1993=100	a precios 1993	a precios 1993
Año	(A)	(B)	(C) = (A) x (B)	(D) = (C) - (A)
2002	18.174	105.3	29.583	11.409
2003	30.037	105.0	34.422	4.385
2007	41.551	126.5	52.562	11.011
2008	42.058	140.9	59.260	17.202
2009	38.134	140.8	53.693	15.559
2010	44.278	140.5	62.210	17.932
2011	46.713	149.3	69.743	23.030
2012	44.509	148.7	66.186	21.677

Fuente: INDEC

La economía internacional sufrió los efectos de la crisis que explotó en 2008, de manera diferenciada. Se desató con toda virulencia en los países avanzados y se propagó por el resto del mundo, aunque a un ritmo dispar. Su coletazo inicial sobre la Argentina se manifestó en la caída del PIB y del PIB industrial, a lo largo de 2009.

A su vez, la expansión económica en China sufrió una considerable desaceleración pero este país continuó demandando materias primas en el mercado internacional. De esta forma, las cotizaciones de exportación de los países de América del Sur no se vieron afectadas. Algunas de ellas, como la soja, incluso continuaron en ascenso. En estos años –lo propio ocurrirá en 2014- el país obtuvo una masa de recursos extra por exportaciones agrarias de una dimensión extraordinaria. Si se suman las ganancias generadas por los precios relativos en el período 2008-

2012 se tiene una suma acumulada de 95.400 millones u\$s. Por otra parte, Argentina se desarrolló en esta década sin acceso al crédito externo, y por eso tampoco se vio perjudicada en los momentos de menor liquidez en los mercados crediticios.

En el período abierto en 2012, la inflación continuó en niveles altos y, hacia finales de 2013, registró una marcada aceleración, con su secuela negativa sobre el salario real, las prestaciones asistenciales y las cifras de pobreza. Esta última alcanza, de acuerdo a estimaciones del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, al 25% de la población. En cuanto a la situación salarial, es cierto que los niveles actuales muestran una significativa recuperación con respecto a los deprimidos valores de 2002, pero existe una marcada heterogeneidad con trabajos precarios y mal pagos y empleos en negro. La distribución del ingreso bajo el kirchnerismo nunca superó los niveles registrados en los últimos años de la convertibilidad, a fines de la década de los noventa. Frente a este panorama del empleo y de la distribución del ingreso, no puede hablarse de un gobierno que haya promovido el progreso social.

La derrota electoral y el agravamiento de la situación económica.

El traspie electoral que sufrió el partido gobernante el 27 de octubre de 2013 tuvo lugar en medio de un serio deterioro de las condiciones económicas y sociales. Otro elemento destacado de esos comicios es que la izquierda registró un notable avance obteniendo, por primera vez en la historia, una bancada con tres diputados nacionales y legisladores en varias provincias. De esta forma, pudo constituirse como una fuerza social y política en el país.

En plena época de elecciones, los problemas económicos se agudizaron. Así, en octubre y en noviembre, el gobierno tuvo que vender divisas a razón de 2.000 millones u\$s por mes. Las pérdidas acumuladas a lo largo de 2013 totalizaron 13.000 millones u\$s y redujeron el stock del banco central a la impensada cifra de 30.500 millones u\$s, en diciembre.

En medio de esta situación, la presidente reestructuró su equipo de colaboradores. Despidió a Guillermo Moreno y designó a Capitanich como jefe de gabinete y a Kicillof como titular de economía. Las nuevas autoridades buscaron frenar el deterioro económico, centrándose en dos frentes principales. En primer lugar, impulsaron una inédita política de apertura al capital extranjero. Dada la manifiesta imposibilidad de conjurar el déficit externo sólo mediante el freno a la salida de dólares, se optó por alentar el ingreso de divisas, ya sea de préstamos o de fondos de inversión directa. El segundo tipo de medidas está orientado a continuar regulando las importaciones para evitar alteraciones súbitas en la balanza comercial.

La estrategia de atraer el capital extranjero tuvo una decidida ratificación con el anuncio del pago de una indemnización a Repsol, la empresa responsable de vaciar YPF mediante el giro de sus utilidades al exterior sin efectuar las inversiones necesarias a pesar de la caída de las reservas y de la producción interna de gas y petróleo. Al momento de su expropiación (abril de 2012), el gobierno había dicho que no correspondía indemnización alguna porque, en todo caso, Repsol era

deudora y no acreedora del país. Pero, en noviembre de 2013 se arribó a un acuerdo de pagos que rondarían los 5.000 millones u\$s, una suma superior a su cotización en bolsa el día previo a su expropiación.

Cuadro 3

BALANZA COMERCIAL DE ENERGIA Y COMBUSTIBLE
en millones de dólares

Año	Exportaciones	Importaciones	Saldo
1999	3.010	730	2.280
2000	4.803	1.035	3.768
2001	4.791	842	3.949
2002	4.618	482	4.136
2003	5.413	545	4.868
2004	6.171	1.003	5.168
2005	7.132	1.544	5.588
2006	7.759	1.730	6.029
2007	6.918	2.845	4.073
2008	7.996	4.334	3.662
2009	6.091	2.626	3.465
2010	6.515	4.474	2.041
2011	6.529	9.314	-2.785
2012	6.528	9.266	-2.738
2013 (*)	5.000	11.500	-6.500
2014 (**)	4.000	14.000	-10.000

(*) estimado

(**) proyectado

Fuente: Overview 1129, noviembre 2003

La compensación a Repsol, que fue negociada con la empresa y con los gobiernos de España y de México, tuvo por objetivo establecer una nueva relación con el imperialismo, a fin de conseguir dólares en los centros financieros mundiales. El giro en la estrategia oficial ya se había manifestado meses atrás, cuando el gobierno entabló negociaciones por sus juicios en el CIADI, anunció tratativas con el Club de París para saldar su deuda, entabló acuerdos sobre estadísticas con el FMI, diseñó un arreglo con los fondos buitres tenedores de la deuda argentina e implementó un fallido blanqueo de capitales para que los evasores pudieran retornar sus dólares del exterior, por una suma que las autoridades estimaban entre 2.000 y 4.000 millones u\$s. Pero el antecedente más contundente fue el convenio firmado con la multinacional Chevron, a la que se otorgó una concesión en el yacimiento Vaca Muerta de Neuquén, el segundo en el mundo por su potencial gasífero y el cuarto, por su perspectiva en materia de petróleo. Por razones de “confidencialidad”, el gobierno no difundió los términos del acuerdo con Chevron. Paralelamente, se intensificó la búsqueda de fondos frescos con organismos internacionales y con prestamistas públicos (China, Rusia, entre otros).

Como se señaló, la segunda pata para el arreglo del frente externo fue el control de las importaciones. Aun cuando estas restricciones afectan al ciclo productivo, sobre todo, a la actividad industrial, a partir de 2012 Guillermo Moreno aplicó un régimen de regulación selectiva para racionar las reservas externas del país. Las cifras del balance MOI de 2013 muestran que no dio resultados porque en la Argentina no es posible ahorrar divisas sin reestructurar un aparato industrial que funciona con importaciones cada vez mayores de insumos. Ni los capitalistas llevan a cabo esas inversiones ni el gobierno está en condiciones de financiarlas. Esto significa que la regulación volverá al método de apretar el torniquete sobre el ingreso de insumos hasta que una caída de la producción industrial obligue a aflojarlo. En diciembre, se anunciaron topes para las importaciones del sector automotriz y electrónico (Tierra del Fuego) que regirán en la primera mitad del año.

Como ni las inversiones petroleras ni los préstamos financieros van a ingresar con la rapidez necesaria para apuntalar el stock de reservas internacionales, el gabinete económico dispuso que el banco central extienda a los grupos cerealeros un título público, indexado por el dólar oficial más una tasa de interés, a cambio de los dólares provenientes de apurar la liquidación de sus saldos exportables. El banco central, que durante años consiguió evitar la dolarización de sus títulos de absorción monetaria, se ve obligado ahora a emitir ese tipo de letras para que entren divisas.

El ritmo de devaluación hacia finales de 2013 y el tipo de cambio real.

El gobierno fracasó en su intento de reducir la inflación retrasando los ajustes del dólar en el mercado de cambios. Dado el atraso de la paridad real que fue acumulado por esta vía, Cristina Kirchner optó por tomar la estrategia opuesta y, a partir del segundo semestre de 2013, impulsó un ritmo de devaluación que, en algunos meses, superó la tasa de inflación. Se estima que 2013 podría terminar con una depreciación nominal del 30%, que sería algo superior al crecimiento de los precios, en igual período. De esta forma, se habrá conseguido una corrección marginal, en términos reales.

La actual política de devaluación gradual influye sobre el comportamiento de los importadores y de los exportadores, porque los primeros adelantan sus compras mientras que los segundos demoran sus ventas, a fin de aprovechar, en cada caso, la cotización más favorable. En parte, las ventas de reservas del banco central en octubre y noviembre 2013 obedecieron a esta razón. Lo mismo ocurre con las operaciones financieras, porque los fondos en pesos de préstamos e inversiones externas ingresados por el mercado de cambios tienen un mayor poder adquisitivo, a medida que se acelera la tasa de devaluación oficial.

Nadie conoce cuál será el ritmo de depreciación de los próximos meses —si continuarán las correcciones graduales o si en algún momento ese ritmo podría acelerarse— pero lo cierto es que el objetivo de Cristina Kirchner es corregir el atraso cambiario. Toda hace prever que, a pesar de las presiones crecientes de la burguesía industrial y agraria, el gobierno implementará

microdevaluaciones para que no haya impactos bruscos sobre el salario real. Si este método no logra resolver el problema, la solución quedará a cargo del gobierno que asuma en 2015. Por otra parte, un dólar en ascenso ejercerá una influencia sobre los costos industriales y la inflación y ello torna ilusorio el reciente anuncio oficial de fijar un tope del 18% a las paritarias que discutirán los aumentos salariales para 2014.

Los subsidios y los aumentos a las policías provinciales.

A la salida de la convertibilidad, Duhalde decidió congelar las tarifas de energía y del transporte, para evitar que su aumento provocara un golpe en el bolsillo de la población. Néstor y Cristina Kirchner optaron por continuar con este congelamiento en el área metropolitana. Pero, frente al incremento de los costos, por el alza inflacionaria y por las mayores importaciones de combustibles, el gobierno tuvo que otorgar subsidios directos a las empresas que prestan esos servicios. En 2007, la suma de esos aportes ascendió a 16.400 millones de pesos y esa cifra fue subiendo anualmente, hasta totalizar 140.000 millones de pesos en 2013, esto es, el equivalente al 4.7% del PIB.

Cuadro 4

SUBSIDIOS ESTATALES AL SECTOR SERVICIOS
en millones de pesos

Año	millones \$
2004	0
2007	16.387
2008	31.260
2009	34.930
2010	50.703
2011	85.432
2012	99.451
2013 (*)	140.000

(*) estimado

Fuente: Overview 1129, noviembre 2013

De acuerdo a la visión oficial, el frente fiscal es otro problema a resolver. En noviembre de 2013, el gobierno de Cristina Kirchner comunicó que se proponía recortar los subsidios, aunque tal reducción se llevaría a cabo sin afectar a los sectores de menores recursos, que seguirían conservando los niveles previos de tarifas. Un anuncio semejante ya había sido formulado por la presidente a comienzos de 2012, pero ese ajuste se frustró a raíz de la indignación popular desatada por la tragedia ferroviaria de Once, que cobró cincuenta muertos.

Por otra parte, en diciembre de 2013, el gobierno kirchnerista chocó con un imprevisto obstáculo en su objetivo de racionalizar el gasto público. En los primeros días de ese mes, se amotinaron fuerzas policiales –cuyas cúpulas mantienen distintos vínculos con el narcotráfico y la trata de

personas- en más de veinte provincias. El conflicto se originó en exigencias de mejoras salariales, sobre todo, por parte de los estratos con remuneraciones más bajas, que en algunos distritos tenían un ingreso inicial de entre 3.000 y 4.000 pesos. En ese contexto, se produjeron saqueos que terminaron con una secuela de más de diez muertos.

Hay que decir que una de las herramientas importantes del kirchnerismo para controlar su presupuesto ha consistido en transferir el ajuste a las provincias, al negarles la participación en impuestos de una gran capacidad recaudatoria como el que se cobra sobre las exportaciones o sobre el cheque. Nunca en el pasado, el comercio exterior concentró tal masa de recursos fiscales que el gobierno central conserva para sí, a pesar de que hizo una modificación legal para transferir una fracción reducida a las provincias. Por lo demás, hay que tener en cuenta que ninguna provincia recibe el financiamiento que el banco central suministra al gobierno nacional. Esta merma de recursos explica que la brecha económica existente con el interior se haya profundizado y que, entre otras cosas, ello se traduzca con toda crudeza en el plano salarial.

En todas las provincias, los gobernadores se allanaron a conceder sustanciales alzas salariales, sobre todo, a las escalas más bajas. El otorgamiento de esos aumentos inmediatamente impulsó exigencias de maestros, judiciales, trabajadores de la salud y de la administración pública provinciales, cuyas remuneraciones también padecen un gran retraso. La perspectiva de estos reclamos por aumentos deja sin significación la pauta del 18% lanzada por el nuevo gabinete económico y preanuncia fuertes luchas por el salario, con su potencial impacto sobre los niveles de la inflación. El propio Capitanich expresó públicamente su temor sobre el “efecto contagio” de los aumentos concedidos a la policía. Con sus presupuestos exhaustos, no sería de extrañar que las provincias recurran de nuevo a las cuasimonedas.

Los pagos de la deuda pública externa.

Cuando ocurrió la debacle de la convertibilidad, el gobierno argentino suspendió el pago de la deuda a los acreedores privados del exterior. La extensa renegociación de estas obligaciones conducida por Néstor Kirchner y por su ministro Lavagna con los acreedores privados en 2005, contempló una sustancial quita sobre su valor nominal. Cabe señalar que estas tratativas fueron llevadas a cabo sin abrir ningún tipo de investigación previa sobre su validez o sobre la forma en que fueron contraídos esos pasivos. A su vez, la oferta del gobierno argentino a los acreedores ofreció algunos beneficios especiales, tal como el llamado cupón PIB que otorgaba rendimientos adicionales si la tasa de crecimiento del producto superaba determinados límites (el 3,2% en 2013). Esto significó una fuente de ganancias extraordinarias para los que aceptaron esos títulos, debido a la gran expansión que tuvo la economía a partir de entonces y, además, la consecuente erogación para el fisco. En 2010, el gobierno reabrió el canje a fin de incorporar a aquellos acreedores que se habían negado a hacerlo en 2005. En la actualidad, se encuentra en negociaciones con los acreedores remanentes, constituidos mayoritariamente por fondos buitres.

Además de esta extendida reestructuración, Néstor y Cristina Kirchner llevaron adelante el denominado proceso de “desendeudamiento”, que consiste en cancelar los títulos emitidos por el tesoro con dólares contantes y sonantes. Este fue un factor importantísimo en la reducción de la deuda estatal en dólares con los acreedores privados. Cuando se agotó su superávit financiero, el gobierno lo llevó a cabo con préstamos del banco central que le permitieron adquirir esas divisas, dando origen a una elevada deuda intra-sector público (que, de hecho, no es exigible al deudor, esto es, al tesoro) y a una enorme declinación de las reservas internacionales.

Como resultado de este proceso, en junio de 2013, la deuda pública total se redujo al 43,6% del PIB (equivalente a 196.000 millones u\$s). De este total, el 25,7% de PIB es deuda intraestatal, el 5,6% son compromisos con organismos internacionales. Por último, los pasivos en dólares gubernamentales con los acreedores privados (55.400 millones u\$s) representan sólo el 12,3% del PIB, una relación sumamente baja, en términos históricos.

El gobierno nunca dio a conocer el valor acumulado de recursos presupuestarios que destinó a las cancelaciones, pero se estima que entre 2005 y 2013, pagó 56.000 millones u\$s. La magnitud de esta transferencia a los acreedores externos refleja el orden de prioridades de la política kirchnerista. Se trata de una suma extraordinaria, que podría haber constituido un fondo de acumulación para llevar a cabo obras de infraestructura u otro tipo de inversiones o para mejorar las condiciones de vida de la población. El gobierno, en cambio pagó puntualmente a los tenedores de bonos, sin que ese comportamiento le reporte hoy demasiado respaldo para obtener fondos externos en los momentos en que los necesita.

Las dificultades que debe atravesar el gobierno en 2014.

Hasta abril próximo, momento en que comienzan las exportaciones de soja, el gobierno deberá conseguir la mayor cantidad de dólares para recomponer sus reservas en moneda extranjera. El pronóstico de una cosecha equivalente a 60 millones de tn de esa oleaginosa ayudará a apuntalar la balanza comercial, que más que nunca depende de las divisas del campo. Los otros rubros arrojan gastos en ascenso. Se estima que el déficit energético ascenderá a 10.000 millones u\$s, y las inversiones en Vaca Muerta sólo podrán aportar una solución en el mediano plazo. Por otra parte, el desbalance de las cuentas MOI no puede sufrir una reducción significativa en el corto plazo e incluso podría aumentar. Su resultado dependerá del ritmo de actividad industrial y de la perspectiva de que haya un repunte significativo en la demanda de Brasil.

Por lo tanto, el gobierno se encamina hacia 2015 afrontando problemas de divisas muy serios. Sin embargo, no puede desconocerse que hay otros frentes que no presentan riesgos semejantes. En primer lugar, el sector financiero se encuentra menos expuesto a crisis cambiarias, que en el pasado. La relación deuda pública externa/PIB se ha reducido y la correspondiente a los acreedores privados representa una proporción baja. Además, la nueva política frente al capital foráneo seguramente permita que los próximos vencimientos de los bonos en circulación sean más fácilmente refinanciables. A su vez, la deuda externa de los capitalistas también se ha visto

reducida, entre otras cosas, por el estímulo de un dólar barato para cancelar estos pasivos. En síntesis la situación financiera del país es hoy menos vulnerable que en el pasado y algunos de los mecanismos que precipitaron los estallidos hiperinflacionarios o cambiarios de 1989 y de 2001 están desactivados.

Pero, el capitalismo argentino está sometido a importantes tensiones. En primer lugar, los desbalances que se proyectan en el sector externo anticipan que 2014 será un año de bajo crecimiento del producto y de las inversiones. Actualmente, varias economías regionales, como Cuyo y Comahue experimentan retrocesos y otras, como el NEA, no logran salir de una penuria económica que alcanza a casi todas sus provincias. Además de ello, a nivel nacional, se insinúan dos cuestiones difíciles. En primer lugar, la distorsión de precios relativos generada por el atraso cambiario y por el congelamiento de las tarifas públicas, en especial, en transporte y en energía, incrementa anualmente el gasto en subsidios entregado a los capitalistas del sector. En el actual contexto de aceleración inflacionaria, ¿cuál va a ser la solución del gobierno?. ¿Recortará ese gasto en subsidios?. ¿Continuará subiendo la partida presupuestaria para esos fines?.

La otra dificultad son los deprimidos salarios de franjas extensas de la población, que a pesar de tener un trabajo se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Esta cuestión se agravó manifiestamente en los últimos días porque los muy elevados aumentos a las policías provinciales han provocado una ola de reclamos del sector público y privado en pos de incrementos del 30%, a pesar de la política conciliadora del sindicalismo oficialista (CTA Yasky y CGT Caló). Dada la magnitud de los aumentos en juego, no podría descartarse la posibilidad de que la inflación continúe recibiendo impulsos alcistas y que empiece a jugar una carrera con el dólar.

El proyecto kirchnerista no es un proyecto de desarrollo.

Una de las afirmaciones más difundidas por los voceros del gobierno es que en estos últimos diez años se impulsó un proceso de “industrialización”, que contrasta abiertamente con la desarticulación que se atravesó durante la convertibilidad. La opinión del kirchnerismo crítico difiere de aquella perspectiva y hace referencia a la existencia de una combinación de rupturas y continuidades con respecto a la década anterior. No obstante, esta visión no es capaz de brindar un balance consistente del funcionamiento de la industria en los últimos diez años.

Nadie podría negar las concreciones operadas a partir de la megadevaluación de 2002, que posibilitó una gran ampliación del mercado interno al desplazar las importaciones, reducir los costos laborales y elevar sustancialmente la rentabilidad empresarial. Bajo el kirchnerismo, el producto industrial se duplicó, creció el empleo y la productividad del trabajo, aumentaron las inversiones y se recuperó el salario real en mayor medida de lo que ocurrió en otros sectores de la economía. También se expandieron las exportaciones MOI, tanto en valor FOB como en volúmenes. Pero, paralelamente, esta reactivación tuvo lugar sobre la base de importaciones cada vez mayores de insumos intermedios, piezas y accesorios y bienes de capital. Esto se tradujo en un

enorme crecimiento del déficit entre exportaciones e importaciones MOI y, también, de la relación entre el déficit de la balanza MOI y el PBI manufacturero.

La industria argentina retomó un sendero de expansión pero a costa de importaciones crecientes por unidad de producto. Expresado en términos concretos, las propias estadísticas oficiales dan cuenta de un notorio aumento del grado de dependencia y de desintegración productiva del capitalismo industrial.

El cuadro 5 presenta la evolución de importaciones y exportaciones MOI y su saldo. También ofrece, en la última columna, el superávit comercial argentino que contrapesa el déficit de las MOI (y también el energético) gracias al notable aporte de las colocaciones primarias. Tras un balance equilibrado en 2002, debido a la enorme recesión y a la declinación de compras del exterior, la reanudación productiva arrojó un desequilibrio entre las exportaciones y las importaciones MOI de 4.087 millones u\$s, en 2003. Esta cifra negativa continuó creciendo a medida que se expandía la producción industrial y llegó a un máximo de 26.618 millones u\$s en 2008, que superó los valores récord registrados durante la convertibilidad (1997 y 1998).

Cuadro 5

SALDO COMERCIAL DE MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL (MOI).
en millones de dólares

Año	Exportaciones MOI	Importaciones MOI	Saldo MOI	Balanza comercial
2003	8.047	12.134	-4.087	15.088
2004	9.616	19.979	-10.363	12.310
2005	11.985	25.392	-13.407	11.700
2006	14.843	30.394	-15.551	12.393
2007	17.333	36.990	-19.657	11.273
2008	22.063	48.681	-26.618	12.555
2009	18.734	33.846	-15.112	16.886
2010	23.846	48.888	-25.042	11.395
2011	28.904	60.415	-31.511	9.731
2012	27.521	55.778	-28.257	12.419
2013 (*)	25.250	59.450	-34.200	8.500

(*) estimado

Fuente: INDEC

La recesión industrial de 2009, provocada por la crisis mundial, determinó una drástica disminución del déficit, a 15.112 millones u\$s, pero la reactivación verificada el año siguiente generó un retobe del desbalance, a 25.042 millones u\$s. En aquellos momentos, los apremios en materia de divisas todavía no se habían manifestado y ello hizo que el gobierno no tomara ninguna medida para intentar realinear el funcionamiento del aparato productivo –la industria automotriz, por caso- o de diseñar líneas que permitieran sustituir productos de baja o de muy baja tecnología, que eran adquiridos en el exterior.

Al ritmo de la reactivación desplegada en 2011, el déficit trepó a 31.511 millones u\$s. Cristina Kirchner tomó nota del enorme drenaje de divisas y, en enero de 2012, encomendó a Guillermo Moreno que estableciera un control de importaciones mediante licencias previas y, en algunos casos, de trabas aduaneras. Estas regulaciones, que recayeron preferentemente sobre bienes de capital antes que sobre insumos necesarios para la producción, posibilitaron un moderado descenso del déficit a 28.257 millones u\$s. Sin embargo, en 2013, tras dos años de vigencia de los controles y de estancamiento del producto manufacturero, el déficit retomó su curso ascendente hasta trepar a, estimativamente, 34.200 millones u\$s.

Una política distinta en favor de los trabajadores.

El panorama que se proyecta hacia 2014 es de dificultades continuas del gobierno, con un bloque dominante cada vez más exigente. Es evidente que la burguesía aprovechará la debilidad del gobierno para demandar condiciones cada vez más exigentes en términos de ajuste y de beneficios y garantías para la inversión capitalista.

Las elecciones del pasado 27 de octubre representaron un acontecimiento inédito en la política argentina. Por primera vez en su historia, fue electa una bancada de tres diputados del FIT y se lograron resultados resonantes en Mendoza y en Salta, obteniéndose concejales, legisladores e, incluso, senadores provinciales. Este resultado implica que la izquierda se ha constituido como una fuerza política y social en el país. Su incorporación al parlamento es el resultado de luchas desplegadas en el frente gremial, estudiantil y territorial. Una franja considerable de la sociedad ha optado por una alternativa anticapitalista y ya no tiene asidero la vieja afirmación kirchnerista de que a la izquierda del gobierno se encuentra la pared.

A partir de ahora, además del kirchnerismo y de la oposición neoliberal, mucha gente visualiza una alternativa de izquierda que ha mostrado su fuerza en las fábricas y en las universidades y su capacidad para obtener una representación política. En un contexto de crisis y de demandas insatisfechas, esa perspectiva comenzará a ser advertida por sectores cada vez más amplios. Por otra parte, las aspiraciones anticapitalistas representan hoy a los trabajadores sindicalizados como a extensas franjas de explotados con salarios de pobreza, desocupados o con un trabajo precarizado, que ven los límites del proyecto kirchnerista y que pugnan por condiciones dignas de vida, de vivienda, salud y educación.

La perspectiva de cambios sustanciales en la sociedad puede ser vista desde dos planos distintos. En primer lugar, en contraste con el actual estado de cosas, requiere una distribución de las horas de trabajo y de la riqueza social de manera de asegurar la plena ocupación, por un lado y un ingreso equivalente a una canasta de necesidades básicas insatisfechas para todo el mundo. Este objetivo requiere llevar a cabo una reforma tributaria que garantice los recursos necesarios de la economía.

En segundo lugar, esa perspectiva debe garantizar que el excedente social se vuelque a fines productivos y que, sobre todo, no se filtre hacia el exterior o a usos parasitarios. También esto contrasta con el actual orden que confía el crecimiento económico a las fuerzas del mercado. Por el contrario, un nuevo curso exigirá la planificación de los recursos sociales y, por ello, el control de las palancas del comercio exterior, de la banca y de otros resortes clave. Tal tarea requiere iniciativa, capacidad para resolver innumerables problemas y para fuerza para enfrentar los obstáculos que se vayan presentando o para corregir los errores que surjan. Pero una planificación de este tipo evitará un empleo irracional del excedente, tal como la fuga de capitales de 80.000 millones u\$s registrado en el quinquenio 2007-2011, los gastos de divisas acumulados en 2003-2013 (223.800 millones u\$s) para sostener un sistema industrial dependiente y desestructurado, los enormes pagos de la deuda externa con el ahorro popular (56.000 millones u\$s en 2005-2013) y la administración ruinosa de los recursos generados por el alza de los términos del intercambio en la última década (95.000 millones u\$s en 2007-2012). Es necesario que este debate político y económico se instale en la agenda de la izquierda en la nueva etapa.